



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

Registro nro.: 39/2026

/// nos Aires, a los 12 días del mes de febrero de 2026, integrada la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Carlos Alberto Mahiques -Presidente-, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky -Vocales-, asistidos por el Secretario actuante, para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la presente causa Nro. **CPE 316/2016/9/CFC2** del registro de esta Sala III, caratulada: **"GGM y otro s/rec. de casación"**. Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General, doctor Raúl Omar Pleé, a la parte querellante (A.R.C.A. -ex A.F.I.P.-), los doctores María Eugenia Gutiérrez y Matías Alejo Gentile Brezigar, en tanto que los imputados "GGM S.A." y Guillermo Andrés Gotelli son asistidos técnicamente por el señor defensor particular, doctor Fernando Archimbal.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó establecido el siguiente orden: doctores Juan Carlos Gemignani, Carlos A. Mahiques y Mariano Hernán Borinsky.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor **juez doctor Juan Carlos Gemignani** dijo:

PRIMERO:

I. Del Sistema de Gestión Judicial (Lex 100) surge que la Sala "B" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la decisión de primera instancia que había resuelto "I) DECLARAR EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN LA ACCIÓN PENAL en la presente causa respecto del hecho relativo a la omisión de



depósito en término de los aportes retenidos a los empleados de GGM S.A. por el período diciembre de 2011, con relación a Guillermo Andrés GOTELLI (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 63 y 67 párrafo 6 del C.P. y art. 9 de la ley 24.769).

II) SOBRESSER POR EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PRESCRIPCION respecto de Guillermo Andrés GOTELLI con relación a la situación fáctica detallada por el punto dispositivo precedente (arts. 334, 335 y 336, inc. 1 del C.P.P.N.).”.

II. Contra dicha decisión, interpusieron recurso de casación los representantes de la A.R.C.A -ex A.F.I.P.-, doctores María Eugenia Gutiérrez y Matías Alejo Gentile Brezigar, el que denegado, motivó la presentación directa ante esta Cámara a la que esta Sala hizo lugar (confr. Reg. Nro. 61/2025, de fecha 6 de marzo de 2025).

III. La parte querellante encarriló la vía recursiva conforme a lo dispuesto en el inciso 1° del art. 456 del C.P.P.N, por cuanto entiende que la sentencia que recurre no valoró que “[...] el curso de la prescripción se habría visto interrumpido por el acogimiento de la contribuyente al régimen establecido por la ley 27.260, efectuado con fecha 31/03/2017, mediante la adhesión a un plan de facilidades de pago en el que se incluyó la deuda correspondiente al período fiscal diciembre/2011[...]”.

En ese sentido, resaltó lo normado por el artículo 54 de la Ley N° 27.260, en cuanto prevé que “El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

no tuviere sentencia firme. (...) La caducidad del plan de facilidades de pago, implicará la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal que corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a su interposición. También importará el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera".

Puso de manifiesto también que, el artículo 18 de la RG 3920/2016, que reglamenta el citado artículo de la Ley N° 27.260, dispone que "La suspensión de las acciones penales en curso y la interrupción del curso de la prescripción de la acción penal previstas en el Artículo 54 de la Ley N° 27.260, se producirán a partir de la fecha de acogimiento al régimen. El nuevo plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que haya operado la caducidad del plan de facilidades de pago. A los efectos de la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y de la interrupción del curso de la prescripción penal a que se refiere el Artículo 54 de la Ley N° 27.260, se entenderá que la causa posee sentencia firme cuando a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, la misma se hallare consentida o pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con las normas del Código Procesal Penal de la Nación (...)".

De lo transcripto -dijo la parte impugnante- "[...] surge con total claridad que las disposiciones legales que resultan aplicables al presente no requieren, bajo ninguna circunstancia,



un pronunciamiento judicial relativo a la interrupción del curso de la prescripción de la acción penal. Por el contrario, el acogimiento al régimen de regularización produce -de pleno derecho- la suspensión de la acción penal en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal.". De allí que concluyó que la interpretación efectuada por la Sala "B" de la cámara a quo, cual es que "[...] si bien el acogimiento de GGM S.A. al plan de facilidades de pago en los términos de la ley 27.260 podría haber dado lugar -de corroborarse los requisitos legales necesarios al efecto- a la suspensión del ejercicio de la acción penal instada respecto del hecho relativo al período investigado, en tanto no existió en el caso una declaración del juzgado de la instancia previa que así lo estableciera, no ha operado en el caso ni aquella suspensión ni la interrupción del término de la prescripción prevista legalmente como consecuencia...", se aparta de la letra ley, en cuanto "[...] prevé dichos efectos incluso cuando aún no se hubiese formulado denuncia penal, así como también en caso que se haya formulado y no se cuente con sentencia firme en los términos allí indicados.".

En esa línea discursiva, subrayó que "[...] de dicho articulado [emerge] que 'El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme. La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. En el caso de las infracciones aduaneras, la cancelación total producirá la extinción de la acción penal aduanera (en los términos de los artículos 930 y 932 del Código Aduanero), en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de acogimiento. La caducidad del plan de facilidades de pago, implicará la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal que corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a su interposición. También importará el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera'".

Asimismo, resaltó que el art. 60 de la ley 27,260 establece que "[...] respecto de los agentes de retención y percepción, regirán las mismas condiciones suspensivas y extintivas de la acción penal previstas en el artículo 54 para los contribuyentes en general, así como también las mismas causales de exclusión previstas en términos generales".

Por lo tanto -continuaron los casacionistas-, si se atiende a que del "[...] sistema Mis Facilidades [surge] que en relación al periodo 12/2011 ["GGM S.A." y Guillermo Andrés Gotelli] se habían acogido anteriormente al Régimen Excepcional Ley N°27260, por medio de Plan J442016, cuya fecha de consolidación fue el 31/03/2017 y la caducidad del mismo se produjo el 18/08/2017, [es en esta] fecha en la cual se reanudó el curso de la prescripción, curso de prescripción que fue interrumpida al momento del acogimiento de dicho plan".



En consecuencia -insistieron-, si bien "[...] la prescripción de la acción penal respecto del hecho vinculado con la omisión de depósito de los aportes retenidos por el lapso de diciembre de 2011 habría operado el 27 de enero de 2018, pues en aquel momento transcurrieron los seis años de aquel plazo de la prescripción de la acción que surgen de correlacionar la pena máxima del art. 9 de la ley 24.769 y lo previsto por el segundo inciso del art 62 del C.P., [ello no es así, pues conforme a lo expuesto anteriormente], se produjo la interrupción del plazo de prescripción de manera anterior al 27/01/2018 por la suscripción de un plan de facilidades de pago a la luz de la Ley 27260."

En virtud de ello, solicitaron que se haga lugar al recurso de casación y se case o anule la decisión cuestionada.

En abono de su postura citaron jurisprudencia y doctrina. Hicieron reserva del caso federal.

IV. En la etapa procesal prevista por los arts. 465, cuarto párrafo y 466 del C.P.P.N., las partes no hicieron presentaciones.

V. Que, en la etapa procesal prevista por los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., las partes tampoco efectuaron presentaciones.

VI. Superada dicha etapa procesal el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del mismo cuerpo legal).

SEGUNDO:

Que, la admisibilidad de la vía recursiva intentada - cómo se apuntó *ut supra*- ha sido resuelta favorablemente por este Tribunal con fecha 6 de marzo de 2025 al hacer lugar al recurso de hecho incoado contra la decisión que denegó el remedio casatorio impetrado (confr. Reg. Nro. 61/2025).





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

TERCERO:

a) Superado el juicio de admisibilidad, con la finalidad de brindar una mayor claridad expositiva de lo que habré de resolver en el *sub lite*, considero apropiado efectuar un resumen de los antecedentes causídicos relevantes para la correcta solución del caso y transcribir los argumentos y las conclusiones medulares sobre los cuales los jueces de la instancia anterior edificaron la extinción de la acción penal y, consecuente, los sobreseimientos dictados en favor de "GGM S.A." y Guillermo Andrés Gotelli.

De la decisión atacada -y en cuanto aquí interesa- se lee que: "1º) [...] b) Con fecha 9/11/2018, el juzgado 'a quo' declaró la extinción de la acción penal instada en los autos principales, por prescripción de la misma, en orden al hecho presunto de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, retenidos por GGM S.A. a sus empleados en relación de dependencia en el período fiscal diciembre/2011, por considerar que desde los diez días hábiles administrativos posteriores al vencimiento de la obligación legal de depositar aquel monto (27/01/2012) hasta el llamado a prestar la declaración indagatoria de Guillermo Andrés GOTELLI (26/02/2018), había transcurrido el plazo de seis años que surge de la correlación entre los arts. 62, inciso 2º, del Código Penal y 9 de la ley 24.769, sin que durante aquel lapso se hayan verificado actos que interrumpan o suspendan el curso de la prescripción en los términos del art. 67 del C.P., disponiendo, en consecuencia, el



sobreseimiento del nombrado, en orden al hecho mencionado, en los términos del art. 336 inciso 1° del C.P.P.N.

c) El decisorio aludido por el punto anterior fue recurrido por la parte querellante (A.F.I.P.) y resultó revocado por este Tribunal por la resolución dictada el 19/07/2019, por considerarse que el mismo resultaba prematuro, toda vez que el informe de antecedentes penales de Guillermo Andrés GOTELLI emitido con fecha 13/05/2017 y considerado por el juzgado 'a quo' para evaluar la vigencia de la acción penal, no resultaba suficiente para descartar la concurrencia de algunas de las causales de suspensión o de interrupción del curso de la prescripción.

d) Con posterioridad a incorporar a los autos principales los informes de los antecedentes del imputado, remitidos con fecha 22/01/2020 y 28/10/2020, el juzgado de la instancia previa declaró nuevamente, con fecha 4/11/2020, la extinción de la acción penal, por prescripción, del suceso presunto de omisión de ingreso de los aportes retenidos en el período fiscal diciembre/2011, y dispuso el sobreseimiento de Guillermo Andrés GOTELLI en orden a aquel hecho. Contra dicha resolución la parte querellante interpuso un recurso de apelación, el cual fue concedido, habiéndose elevado nuevamente el presente incidente a este Tribunal.

e) Una vez radicado el incidente ante esta Sala 'B', la defensa de Guillermo Andrés GOTELLI hizo saber que había efectuado un planteo en la instancia anterior por el cual se había solicitado la suspensión del ejercicio de la acción penal en los términos de las leyes 27.541 y 27.562, '...razón por la cual debían suspenderse las actuaciones y los efectos derivados de las





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

decisiones adoptadas...', por lo que con fecha 22/12/2020 este Tribunal dispuso devolver el presente legajo al juzgado 'a quo' a los fines de que se expida con relación al planteo formulado por la defensa en aquellos términos, encomendándole al señor juez a cargo de aquel tribunal que, en caso de rechazarse el mismo y/o de no extender el beneficio a Guillermo Andrés GOTELLI, remita nuevamente el incidente a esta Sala 'B' para continuar con el trámite del mismo.

f) Con fecha 20/04/2022, en el marco del incidente CPE 316/2016/3 formado en los autos principales a los que pertenece este legajo, el juzgado 'a quo' resolvió, en lo que resulta de interés a los fines de la presente, disponer la suspensión del ejercicio de la acción penal instada contra Guillermo Andrés GOTELLI respecto de la omisión presunta de depósito de los aportes retenidos por GGM S.A., con destino al 'Régimen Nacional de la Seguridad Social', correspondiente al período fiscal diciembre/2011, '...desde el día 17 de noviembre de 2020...', en los términos del art. 10 de la ley 27.541, y declarar la interrupción del curso de la prescripción de la acción penal instada contra el nombrado y en orden al hecho mencionado, '...desde el día 17 de noviembre de 2020 (conf. art. 10 de la ley 27.541)...'.

g) Con fecha 21/09/2023, el juzgado de la instancia anterior dispuso reanudar el ejercicio de la acción penal y comenzar a computar el lapso de la prescripción de la misma, correspondiente al hecho presunto de apropiación indebida de aportes retenidos por GGM S.A. en el período fiscal diciembre/2011, toda vez que con fecha 14/09/2023 la A.F.I.P.



puso en conocimiento del juzgado 'a quo' que el plan de facilidades de pago en el que se sustentó la decisión de suspender el ejercicio de la acción penal de que se trata, había caducado.

En función de lo decidido, con fecha 26/09/2023, el juzgado de la instancia previa elevó el presente incidente a este Tribunal, mediante pase digital, dando cumplimiento a la remisión encomendada oportunamente, recordada por el segundo párrafo del apartado e) del presente considerando.

2°) Que, por lo expresado, el objeto de conocimiento de este incidente se encuentra constituido por la impugnación presentada por la representación de la parte querellante contra la resolución dictada por el juzgado de la instancia anterior (apartado d) del considerando que antecede), por la que se declaró la extinción de la acción penal, por prescripción, respecto del hecho presunto de apropiación indebida de los aportes retenidos por GGM S.A. a sus empleados en relación de dependencia con destino al Sistema Único de la Seguridad Social, en el período fiscal diciembre/2011, y se dispuso, en consecuencia, el sobreseimiento de Guillermo Andrés GOTELLI en orden al hecho mencionado[...].

12°) Que, en el caso, se advierte que desde la fecha de la comisión presunta del hecho de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social retenidos a los empleados en relación de dependencia de GGM S.A. en el período fiscal diciembre/2011, la cual se habría producido a los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo para el ingreso de los importes retenidos (27/01/2012), hasta la fecha en la cual se convocó a Guillermo Andrés GOTELLI a prestar la declaración





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

indagatoria (26/02/2018), transcurrió el plazo de seis años que surge de correlacionar lo previsto por el art. 9 de la ley N° 24.769 (vigente a la época de comisión del hecho) y el art. 62 inc. 2° del Código Penal.

13°) Que, con relación a las causales de interrupción y de suspensión del curso de la prescripción, corresponde expresar que la decisión del juzgado 'a quo' por la cual se dispuso declarar suspendido el ejercicio de la acción penal en los términos de la ley 27.541 (incidente CPE 316/2016/3), respecto del hecho de que se trata por la presente -la que, por lo demás, fue adoptada sin que el juzgado de la instancia anterior dispusiera dejar sin efecto la resolución por la que había declarado, previamente, la extinción de la acción penal por el mismo hecho- no tiene incidencia alguna en la evaluación de la vigencia de la acción penal del hecho relativo al período fiscal diciembre/2011, toda vez que, conforme se expresó por el apartado f) del considerando 1° de la presente, el ejercicio de la acción penal fue suspendido '1° ...desde el día 17 de noviembre de 2020...', es decir, con posterioridad a la fecha en la que habría operado la prescripción de la acción penal, de no existir causales de suspensión o de interrupción, al haber transcurrido los seis años desde la fecha de comisión presunta del suceso ilícito investigado (el 27/01/2018).

14°) Que, por otra parte, lo expresado por la parte querellante por el memorial presentado en la audiencia prevista por el art. 454 del C.P.P.N., en cuanto a que el curso de la prescripción se habría visto interrumpido por el acogimiento de



la contribuyente al régimen establecido por la ley 27.260, efectuado con fecha 31/03/2017, mediante la adhesión a un plan de facilidades de pago en el que se incluyó la deuda correspondiente al período fiscal diciembre/2011, cuyas constancias fueron acompañadas por el memorial aludido, no puede tener una recepción favorable[...].

15°) Que, con relación a lo esgrimido por la recurrente, corresponde establecer que, si bien el acogimiento de GGM S.A. al plan de facilidades de pago en los términos de la ley 27.260 podría haber dado lugar -de corroborarse los requisitos legales necesarios al efecto- a la suspensión del ejercicio de la acción penal instada respecto del hecho relativo al período investigado, en tanto no existió en el caso una declaración del juzgado de la instancia previa que así lo estableciera, no ha operado en el caso ni aquella suspensión ni la interrupción del término de la prescripción prevista legalmente como consecuencia.

En ese sentido, este Tribunal ha establecido en oportunidades anteriores que "...para tener por configurada una situación de suspensión del ejercicio de la acción penal, en las condiciones y con las consecuencias previstas legalmente, como regla general, resulta necesaria la declaración de un órgano jurisdiccional que así lo establezca, determinando la fecha en que ha tenido lugar la suspensión, pues aquellos órganos tienen competencia para la verificación previa de la presencia de los requisitos positivos y de la inexistencia de los negativos contemplados al efecto, así como para establecer aquel momento[...]".

16°) Que, en consecuencia, conforme lo expresado por el considerando 12° de la presente, y no habiéndose producido algún





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

acto con aptitud interruptiva del curso de la prescripción de la acción penal por el hecho en trato respecto de Guillermo Andrés GOTELLI de acuerdo con lo que se establece por el art. 67 del Código Penal (confr. informes del Registro Nacional de Reincidencia remitidos con fecha 22/01/2020, 28/10/2020 y 15/10 /2021, incorporados a los autos principales y al incidente N° CPE 316/2016/3), corresponde confirmar la resolución apelada."

b) Teniendo en cuenta el hecho debatido (falta de ingreso al fisco de los montos retenidos a los trabajadores en relación de dependencia con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social relativo al período fiscal 12/2011 -\$599.037,07, vid. recurso apelación interpuesto por la A.R.C.A en el marco del expediente Nro. 316/2016, "GGM y otros s/ infracción ley 24769"-), no obstante el acierto o error de los argumentos y conclusiones esgrimidos por la parte impugnante en el recurso de casación que excitó la intervención del Tribunal, lo cierto es que se torna aplicable inveterada jurisprudencia del Alto Tribunal. Concretamente me refiero a la que expresa que "[...] *ineludible principio en la teoría de los recursos es la que ordena que las presentaciones recursivas sean resueltas de conformidad con las circunstancias existentes al momento de su tratamiento, aunque sean ulteriores a su interposición*" (confr. Fallos: 285:353; 310:819 y 315:584, entre muchos otros -en la misma dirección, confr. mi voto en la causa Nro. 11.823 de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Reg. Nro.



1233/12, "Asrin, Alejandro y otros s/ rec. de casación", rta. el 13 de julio de 2012, entre muchas otras).

En efecto, del contenido del recurso de apelación incoado por la parte querellante en el marco del expediente Nro. 316/2016, "GGM y otros s/ infracción ley 24769"-, surge que en relación al período fiscal 12/2011 sobre el cual se dispuso la extinción de la acción penal por prescripción y, el consecuente sobreseimiento del imputado, la suma evadida ascendía a \$ 599.037,07, extremo que demuestra que no alcanza el umbral de punibilidad previsto para el delito investigado (tres millones quinientos mil pesos -\$ 3.500.000-) mensuales establecido por la ley 27799, denominada de "inocencia fiscal" (B.O. 02/01/2026), lo cual torna atípica el comportamiento ventilado.

En ese sentido, no debe desatenderse cuanto decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación *in re*: "Palero" (P. 931. XLI., resuelto el 23/10/2007) y, mas recientemente, en "Vidal" CPE 601/2016/CS1, del 28/10/2021, precedentes que, aplicados al caso, hacen que la decisión condenatoria recaída en cabeza del acusado Guillermo Andrés Gotelli deba ser revisada.

CUARTO:

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo:

SUSPENDER el trámite del recurso de casación interpuesto por la querella -A.R.C.A. y REMITIR la presente causa al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 2 de esta ciudad a los fines de que resuelva acerca de la atipicidad de la conducta enrostrada al nombrado Gotelli, DEBIENDO INFORMAR a este Tribunal la decisión finalmente adoptada.

Tal es mi voto.

El señor juez doctor **Carlos A. Mahiques** dijo:





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

La extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente, de tal suerte que debe ser declarada de oficio, en cualquier estado de la causa y en forma previa a toda decisión sobre el fondo.

En este entendimiento, y sentado cuanto precede, disiento con el colega que abre el acuerdo en tanto considero que el planteo de la querella no puede tener acogida favorable.

A fin de explicar más claramente mi disenso, corresponde delimitar en el sub examine el alcance de los efectos penales establecidos en el artículo 54 de la ley 27.260.

La norma mencionada establece que "(e)l acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando esta no tuviere sentencia firme (...) La caducidad del plan de facilidades de pago, implicará la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal que corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a su interposición. También importará el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera".



En efecto, el artículo transcripto regula cuestiones que atañen a la vigencia de la acción penal. Por un lado, establece que durante su suspensión cesa la investigación por el plazo establecido en el plan de pagos consolidado, lo cual origina un claro beneficio para los responsables de las infracciones penales que se acogen a esa moratoria. Por el otro, al establecer la interrupción del curso de la prescripción, preserva el plazo originario previsto para la investigación del delito que se trate ante una eventual caducidad del mentado plan y por lo tanto no se afecta la vigencia de la acción por el paso del tiempo.

De la literalidad de la norma resulta evidente que la interrupción de la prescripción es una consecuencia de la suspensión de la acción penal, contemplada en este tipo de regímenes como un beneficio a favor de quien regulariza sus obligaciones en los términos y bajo las condiciones allí establecidas. Entonces si el otorgamiento de este beneficio no fue concedido, no puede sostenerse que el curso de la prescripción se haya interrumpido ya que implicaría una aplicación de la norma en partes, de un modo contrario a los fines perseguidos por ésta, realizando además una interpretación perjudicial para el imputado (cfr. *mutatis mutandi* criterio expuesto en mis votos en precedentes FSM 72713/2019/6/1/CFC2, *Morales, Marcelo Fabián s/ legajo de casación*, reg. nro. 1232/2025; y CPE 126/2016/14/CFC2, *Sintermetal S.A.I.C. s/recurso de casación*, reg. nro. 1287/2025).





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

De las constancias del expediente surge que la representante del Ministerio Público Fiscal -ante quien tramitaba el expediente en los términos del art. 196 del CPPN- solicitó se suspenda la acción penal instada en la causa tras tomar conocimiento del acogimiento a la moratoria prevista en la ley 27.260 por parte de GGM SA. Sin embargo, dada la caducidad del plan de pagos en cuestión, tanto la parte querellante ARCA como luego la propia acusadora pública se opusieron a la concesión del beneficio. Ello, motivó que se continuase la investigación promovida respecto al suceso cuya acción penal fue extinguida por prescripción y de la que se agravia el recurrente (cfr. fs. 463/464, 474, 491/492, 494/vta. y 495).

En este escenario, no podrían escindirse las previsiones mencionadas y que forman parte del mismo artículo bajo examen. A mi ver, luce desacertada la interpretación de la querella en cuanto toma aisladamente una parte de esa norma, específicamente la que edicta que ello puede ocurrir "...aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa..." para construir una posible interrupción de la prescripción en supuestos como el de autos. También resulta desajustado considerar que solo basta la aceptación del Fisco del plan de pagos solicitado por el deudor para tener por interrumpida la prescripción. Pues, oportunamente el juez penal decidió que no era posible aplicar el



beneficio establecido por la ley 27.260 y que, por ello, debía continuarse con la investigación.

En estos términos, la resolución impugnada se encuentra razonablemente fundada y los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (cfr. Fallos 302:284; 304:415); decisión que cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido (cfr. Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888).

En virtud de todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso de casación interpuesto por la querella ARCA -ex AFIP- sin costas en la instancia por las particularidades del caso (arts. 470 y 471 -a contrario sensu- y 530 del CPPN).

Tal es mi voto.

El señor juez **doctor Mariano H. Borinsky** dijo:

I. Preliminarmente, y con el objeto de brindar una mayor claridad expositiva, corresponde efectuar un breve repaso de los principales actos procesales llevados a cabo en las presentes actuaciones.

El hecho imputado en autos fue encuadrado legalmente en la figura de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social (art. 9 de la ley 24.769 -texto según ley 26.735-), período 12/2011, cuya fecha de comisión habría operado al vencimiento de los diez días hábiles administrativos para el ingreso de los montos retenidos, esto es, el 27 de enero de 2012.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

Con relación a ese hecho, el día 26 de febrero de 2018 se convocó por primera vez a prestar declaración indagatoria (art. 294 del CPPN) a Guillermo Andrés Gotelli.

Luego, con fecha 9/11/2018 el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 3 -en lo que aquí interesa- declaró la extinción de la acción penal por prescripción y dictó el sobreseimiento del mencionado Guillermo A. Gotelli.

Esta decisión -apelada por la querella- fue revocada respecto a Gotelli (Reg. n° 530/19 del 19/7/2019 Sala B CNAPE) por haber sido declarada en forma prematura, pues -según se indicó- faltaba contar con el informe de reincidencia actualizado del nombrado.

Posteriormente, el 22/1/2020, se recibió un informe donde consta que Gotelli no registraba antecedentes.

El 4 de noviembre de 2020, el juzgado de primera instancia volvió a resolver del mismo modo que lo hiciera en su anterior intervención, luego de ponderar que Gotelli carecía entonces de antecedentes.

Esta resolución fue recurrida por la querella ARCA (entonces AFIP).

Una vez radicado el legajo nuevamente en la Sala B de la CNAPE, la defensa de Gotelli hizo saber que había solicitado la suspensión de la acción penal con sustento en las previsiones de las leyes 27.541 y 27.562.

Fue entonces que, a raíz de dicho planteo, el 22/12/2020, la Sala B de la cámara a quo devolvió el legajo al



juzgado de origen para que se expida sobre aquél requerimiento de la defensa, haciéndole saber que, en caso de rechazarlo o de no extender el beneficio solicitado, debería remitir el incidente a esos estrados para continuar con el trámite de la causa.

Siguiendo con la línea temporal de los actos procesales dictados en el marco del presente expediente, se observa que el 20/4/2022 el juzgado de 1ra. instancia suspendió la acción penal que fuera instada oportunamente contra Gotelli por el hecho imputado referido al período 12/2011, desde el día 17 de noviembre de 2020, y declaró la interrupción del curso prescripción a partir desde ese mismo día.

Un año y cinco meses más tarde, esto es, el 21/9/2023, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 3 reanudó el ejercicio de la acción penal y procedió a computar el lapso de prescripción de la misma, toda vez que el 14/9/2023 la entonces AFIP informó que el plan de facilidades en el que se había sustentado la decisión de suspender la acción penal, había caducado ese mismo día.

Como consecuencia de lo anterior, el 26 de septiembre de 2023, el juzgado elevó el legajo a la Sala B de la CNAPE cumpliendo la remisión encomendada el 22/12/2020.

Es por ello que dicha cámara volvió a tener conocimiento por vía de apelación de la querella contra el sobreseimiento dictado el 4/11/2020, lo que resultó en el dictado de la resolución que hoy se tiene aquí a estudio.

II. Efectuado entonces el *racconto* de los diversos actos procesales descriptos en el punto anterior, cabe destacar que la querella -en oportunidad de presentar el memorial sustitutivo de la audiencia de informes del art. 454 del C.P.P.N.- volvió a referir que el hecho imputado a GGM S.A. y a Gotelli no se





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

encontraba prescripto, por los siguientes motivos: 1) porque se trata de un delito continuado que debe ser analizado con los otros hechos imputados en la causa principal y en los legajos acumulados, y 2) porque GGM S.A. (la persona jurídica imputada conjuntamente con Guillermo Andrés Gotelli) había incluido la deuda del período 12/2011 en un plan de facilidades regularizado en los términos de la ley 27.260, consolidado el 31/3/2017 que caducó el 18/8/2017 "...fecha en la que se reanudó el curso de la prescripción que fue interrumpido al momento de acogimiento a dicho plan.", agregando además que -según su propia argumentación- el acogimiento al régimen de la mencionada ley 27.260 produce la suspensión de la acción penal que se encuentre en curso y la interrupción de la prescripción de aquella, aún cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

En otras palabras, el punto medular de este último agravio (el cual, vale destacar, recién fue introducido por la querella en el memorial de la audiencia del artículo 454 del C.P.P.N.) consistió en alegar que el mero acogimiento a un plan de facilidades en esos términos, produjo de pleno derecho la suspensión del ejercicio de la acción penal y la consecuente interrupción del plazo de prescripción del período fiscal 12/2011 de manera previa al 27/1/2018 (fecha en la que habría operado la prescripción de la acción penal por haber transcurrido más de 6 años desde el vencimiento de la obligación que operó el 27/1/2012



por la suscripción de un plan facilidades de pago), razón por la cual la acción penal aún se encontraba vigente.

III. Llegado el momento de resolver la controversia, habré de mencionar lo siguiente:

Coincido con la opinión del doctor Mahiques en cuanto a que la prescripción de la acción penal tiene carácter de orden público, motivo por el cual debe ser declarada de oficio puesto que se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente (CSJN Fallos: 330:1369, entre muchos otros).

Ahora bien, no obstante ello, y sin perjuicio de coincidir con la solución adoptada por la Sala B de la CNAPE en la resolución recurrida, al entender que la acción penal relativa al hecho investigado en autos (que, como ya se señaló, fuera calificado como apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, período 11/2012) se encuentra prescripta -v. especialmente considerandos 12°, 13°, 14° y 15° a los que cabe remitirse en honor a la brevedad-; lo cierto es que en atención al modo en que ha quedado definida la cuestión a decidir por los votos discordantes de los colegas que me anteceden en el orden de votación -y al solo efecto de conformar mayoría de fundamentos para que la sentencia pueda reputarse válida de conformidad a las previsiones del artículo 398 del C.P.P.N.)-, es que habré de plegarme a la postura del doctor Mahiques, razón por la que emitiré mi voto en igual sentido, en cuanto propone rechazar el recurso de casación interpuesto por la querella ARCA, sin costas (arts. 470 y 471 -a contrario sensu- y 531 *in fine* del C.P.P.N.).

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, por mayoría, el Tribunal,

RESUELVE:





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la querella ARCA, sin costas (arts. 470 y 471 *-a contrario sensu-* y 531 *in fine* del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

